I. EXPEDIENTE D-11399 - SENTENCIA C-004/17 (Enero 18)
M.P. Aquiles Arrieta Gómez

1. Norma acusada

LEY 1678 DE 2013

(noviembre 13)

Por medio de la cual se garantiza la educación de posgrados al 0.1% de los mejores profesionales graduados en las instituciones de educación superior públicas y privadas del país

ARTÍCULO 8o. PÉRDIDA DE LA BECA. La beca podrá ser retirada en cualquier momento si se demuestran algunas de las siguientes circunstancias:

1. Bajo rendimiento académico.
2. Inasistencia a las clases.
3. Violación a los reglamentos internos estudiantiles de la universidad o institución de educación superior.

4. Por la ocurrencia de hechos delictivos.

PARÁGRAFO. Cuando el becario perdiera la beca, deberá cancelar a favor de la Nación los recursos que fueren invertidos en sus estudios hasta ese momento.

2. Decisión

Declarar **INEXEQUIBLE** el numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013.

3. Síntesis de la providencia

La Corte determinó que la posibilidad de retirar una beca por "*la ocurrencia de hechos delictivos*" prevista en el numeral 4 del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013, desconoce la garantía constitucional en virtud de la cual, solo se puede imponer una sanción a la persona a través de un proceso en el que se haya demostrado su culpabilidad, toda vez que dicha expresión normativa, ni siquiera exige que el becario sea culpable del acto delictivo, sino que consagra una responsabilidad objetiva que presume su culpabilidad y no permite

distinguir la gravedad de los hechos. Como está concebida esta causal, permite además, que se pueda sancionar a personas tan solo vinculadas a la ocurrencia de los hechos.

Como lo ha precisado la jurisprudencia, la presunción de inocencia se orienta por los principios de responsabilidad del acto y responsabilidad subjetiva, además de tener en cuenta el grado de culpabilidad para la imposición de una pena. A su vez, incorpora tres garantías aplicables, entre otras, al ámbito de la administración pública: *(i)* solo se puede imponer una sanción a la persona a través de un proceso en el que se haya demostrado su culpabilidad; *(ii)* la carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre la acusación y *(iii)* el trato a las personas bajo investigación por un delito, debe ser acorde con este principio.

Para la Corte, la pérdida de la beca por la causal acusada, vulnera el principio de responsabilidad del acto, puesto que su texto es tan amplio que ni siquiera exige que se haya incurrido o se sea culpable de un delito, sino simplemente "*la ocurrencia de hechos delictivos*" frente a los cuales no se requiere que

el hecho sea atribuible al becario. Para desvirtuar la presunción de inocencia, es necesario que el individuo sea declarado culpable de un acto delictivo específico y no simplemente que exista un delito. Así mismo, la norma tampoco permite el establecimiento de una responsabilidad subjetiva, toda vez que la ocurrencia de hechos delictivos es una circunstancia

objetiva en la cual no se exige ningún nexo con la voluntad del becario. De esta manera, el numeral demandado establece una responsabilidad objetiva por la simple existencia de hechos delictivos, lo cual es claramente inconstitucional. Tampoco, la disposición permite distinguir entre el grado de culpabilidad de la persona, por cuanto impone la sanción independientemente de la gravedad del delito, lo cual resulta desproporcionado, en la medida en que dicha consecuencia se aplicaría a situaciones completamente disímiles.

De otra parte, el tribunal consideró que la sanción prevista en el numeral 4 del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013 también lesiona el derecho a la educación, ya que permite retirar una beca de posgrado a una persona por "*la ocurrencia de hechos delictivos*" sin exigir que el delito se haya cometido por el becario, ni que exista un proceso previo en el cual se adopte dicha decisión. Si bien es cierto que el acceso a becas de posgrado no hace parte del contenido protegido constitucionalmente del derecho a la educación, pues es una expectativa que dependen de su configuración legal, reglamentaria y contractual, sí debe garantizarse su continuidad cuando ha sido previamente otorgada.

A juicio de la Corte, aunque la finalidad de la medida es garantizar la idoneidad no solo profesional sino también ético social de aquellas personas que sean beneficiarias de una beca, lo cual constituye un objetivo legítimo, a la vez que resulta acorde con la priorización eficiente de recursos escasos, el medio no resulta adecuado ni conducente. Por el contrario, se trata de un mecanismo prohibido, que no solo vulnera de manera grave el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que no permite cumplir con el objetivo de garantizar la idoneidad ética social de la persona, ya que la regla definida es tan amplia y ambigua que ni siquiera permite establecer si efectivamente el becario ha incurrido en un delito, afectándose la continuidad en la educación superior a través de un mecanismo que viola claramente la Constitución.

Finalmente, la corporación consideró que no era posible declarar la exequibilidad condicionada, tal como lo sugirieron algunos intervinientes, teniendo en cuenta que la violación de las garantías constitucionales fundamentales es tan

grave que no podía avalarla de manera condicionada y si lo hiciera tendría que determinar reglas básicas en materia sancionatoria que solo pueden ser señalados por el legislador, tales como, a quien se aplica la sanción y los requisitos para imponerla. Advirtió, que no sería suficiente, como se hizo en otros casos, de sujetarla a la existencia de una sentencia ejecutoriada, habida cuenta que la norma no siquiera señala que los hechos deban ser cometidos por el becario, sino que establece una responsabilidad objetiva que presume su culpabilidad y no permite distinguir la gravedad de los hechos. Por lo expuesto, la Corte procedió a declarar la inexecutable del numeral 4 del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013.

4. Salvamentos de voto

Los magistrados **Luis Guillermo Guerrero Pérez** y **Gabriel Eduardo Mendoza Martelo** se apartaron de la anterior decisión de inexecutable, por las siguientes razones:

En concepto del magistrado **Guerrero Pérez**, la exclusión de la beca de posgrado prevista en el numeral 4 del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013, para quienes incurran en la comisión de delitos, tiene una justificación legítima en la medida en que se trata de un estímulo que se otorga a los mejores profesionales graduados en las universidades públicas y privadas del país, para lo cual resulta adecuado exigir además de los méritos académicos, una conducta intachable. A su juicio, no puede considerarse que el establecimiento de esa causal configure *per se* una vulneración de la presunción de inocencia, toda vez que cuando se alude a la comisión de delitos se está frente a casos en los que se ha establecido la responsabilidad penal del becario, mediante sentencia ejecutoriada. De ninguna forma puede entenderse que en el numeral acusado, el Legislador haya prescindido del respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, principio y derecho fundamental a los que se sujeta toda imposición de una sanción, sin que sea necesario establecerlo expresamente, ya que son pauta de interpretación obligatoria de toda norma jurídica, atendiendo a su finalidad.

Por consiguiente, el numeral demandado debía ser interpretado y aplicado de conformidad con los principios y derechos

constitucionales, de modo que solo se configuraba la causal de pérdida de la beca, cuando mediara una sentencia judicial que declare la responsabilidad penal del becario y por lo tanto, se desvirtuara la presunción de inocencia. Advirtió, que la declaración de inexecutable permite que toda persona que haya sido sujeto de condena penal, mantenga el beneficio educativo de la beca, en menoscabo de otra persona cuyo comportamiento y excelente rendimiento académico merezca acceder al mismo, lo cual resulta desproporcionado frente a recursos escasos que solo deberían concederse a quienes tengan los méritos para ello.

En la misma línea, la discrepancia del magistrado **Mendoza Martelo** con la decisión de mayoría, que declaró la inexecutable del precepto acusado, según el cual pierden la beca los estudiantes que incurran en conductas delictivas, obedeció a que, a no dudarlo, con ella se desvirtúa, en gran medida, la finalidad que subyace en la Ley 1678 de 2013 que claramente propugna por exaltar y premiar a los mejores profesionales del país, colocándolos como ejemplos a seguir y, de esa manera, también estimular a las nuevas generaciones de estudiantes a seguir sus pasos, en la idea de que si alcanzan los mayores niveles posibles de excelencia en su aprendizaje, tanto desde el punto de vista académico como desde la perspectiva ética y comportamental, pueden acceder al mismo beneficio.

Observó este magistrado, que la ley en cuestión viene concebida como una de las varias maneras de avanzar en la consolidación de una de las políticas públicas más importantes de cualquier país, cual es la de promover, al máximo la educación de calidad como una de las estrategias primordiales para el desarrollo social y económico, perspectiva bajo la cual resulta indispensable incentivar a los estudiantes a comprometer sus mayores esfuerzos en su actividad bajo el estímulo de que su buen comportamiento académico y conductual podrá recibir una condigna recompensa, para su beneficio y para el de la sociedad que habrá de aprovechar sus conocimientos profesionales. Esa finalidad de la norma claramente no se aviene con la posibilidad de que quienes incurran en hechos delictivos continúen como destinatarios de las becas que en virtud de

la Ley se pueden reconocer, pues, de ser así, a no dudarlo, el propósito del órgano democrático, enmarcado en una importantísima idealidad racional y ética indefectiblemente se desvirtúa. En su criterio, la mayoría debió efectuar un mínimo esfuerzo para no hacer nugatoria esa perspectiva.

En ese sentido, consideró que una valoración correcta de los reales cargos de la demanda permitía concluir que lo que verdaderamente se estaba reprochando era el desconocimiento del principio de presunción de inocencia al entenderse que la sola circunstancia de incurrir el becario en conductas delictivas daba lugar a que se perdiera la beca otorgada, sin la necesidad de que existiese un pronunciamiento judicial en firme que impusiese la correspondiente condena por la comisión del ilícito. Así delimitados los cargos de la demanda, como ha debido hacerse, según su apropiada lectura, la respuesta plausible en este caso era optar porque la Corte entendiera que solo había delito si un pronunciamiento judicial en firme, como desde el punto de vista jurídico era apenas elemental suponer, así lo declarara. O, en su defecto, emitir un fallo de executable condicionada al entendimiento de la norma en ese sentido, como se hizo, por ejemplo, en las sentencias C-416 de 2002, C-030 de 2003, C-1156 de 2003, C-271 de 2003 y C-282 de 2012.

En síntesis, estimó que esa ha debido ser la solución del caso, no solo para honrar el principio democrático, esto es, la competencia legislativa del Congreso, que tiene que ver con la preservación del derecho, sino también con el objeto de atacar las reglas que le imponen a la Corte decidir los cargos de la demanda de acuerdo con su genuina formulación y no oficiosamente más allá de sus alcances. Adicionalmente advirtió, que la decisión de inexecutable adoptada se fundamentó en razones no expuestas en la demanda según la referencia que de ella se hizo en el proyecto de fallo. A su modo de ver, la demanda no cuestiona el precepto acusado por una "indeterminación" distinta a que se estaría, eventualmente, desconociendo el derecho a la presunción de inocencia (no cuestiona quien debe ser el autor del ilícito), pues la redacción integral de la norma no arroja dudas al respecto y, a su parecer, dicha precisa objeción ha debido contar con

la respuesta ya indicada. Además, advirtió, que el cargo por supuesta violación del derecho a la educación en la demanda no se desarrolla autónomamente.

LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA QUE SE GARANTIZA A LA MUJER TRABAJADORA EN ESTADO DE EMBARAZO O DE LACTANCIA, DEBE EXTENDERSE A LA PAREJA DE LA MUJER QUE SE ENCUENTRA EN LA MISMA SITUACIÓN Y DEPENDE ECONÓMICAMENTE DE AQUÉLLA, EN PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR RECIÉN NACIDO Y DEL QUE ESTÁ POR NACER